

Achao, treinta de de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos, oídos y considerando.

PRIMERO: Que comparecen Lucía Odette Alba Hernández, José Marcelo Araya Carrasco, Sergio Alberto Ojeda Bontes, Noelia del Carmen Paredes Cárdenas, María Eugenia Guajardo Tureuna, Víctor Manuel Pérez Frías, Cristian Alfredo Pérez Vivar, Marcela Carmen Campos Méndez, Carolina Olea Alarcón, René Eduardo Almonacid Serón, Manuel Aliro Cheuquepil Andrade, José Alfonso Álvarez Ruiz, Héctor Joel Ojeda Ruiz, Fabiola Oyarzún López, Diana Paillán Subiabre, Manuel Alberto Mansilla Mansilla, Martina Silva Hernández, Juan Álvarez Godoy, Marcela Barría Vargas, Luis Cárdenas Hernández, María Angélica Avendaño Bontes, Iván Sebastián Huaiquimilla Arriagada, Sandra Patricia Vera Álvarez, Marylyn Matas Ibarrola, Rita Ojeda Sotomayor, Vilma del Carmen Llauquén Llauquén, Sandra Marisa Pichuncheo Bontes, Violeta Isabel Mansilla Antimán, Flor Bernardita Santana Viva, Valeria Andrea Velásquez Ruiz, Fabián Ignacio Barrientos Sotomayor, Gisela del Carmen Cárdenas Cuitiño, Estefanía Gabriela del Carmen Labarca Gajardo, Claudio Rodrigo Mansilla Vivar, Juvenal Patricio Núñez Dimter, Manuel Leonardo Barrientos Barrientos, Carola Oyarzún Cárdenas, Carlos Hernán Contreras Alvarado, José Mauricio Calbuante Loncón, Víctor Hugo Alfonso Barría Álvarez, José Hugo Levill Levill, Walter Selin Pacheco Oliva, José Adrián Álvarez Álvarez, Martina Ignacia Silva Hernández, Alex Francisco Soto Vivar, Carlos Froilán Yáñez Delgado, Ramón Arturo Oyarzún González, Jaime Santiago Águila Cárdenas, Carmen Julia Vera Pérez, Verónica del Carmen Ulloa Oyarzún, Gisela Victoria Garcés Álvarez, David Antonio Lucero Ayala, Luis Heraldo Cárdenas Águila, Berardo Fabián Marchant Cheuquepil, Jessie Carolina Zurita Mansilla María

Magdalena Reyes Aguilar, Luisa Palmenia Mansilla, Pilar Antonieta Altamirano Ortega, Manuela Fabiola de Lourdes Álvarez Díaz, Judith del Carmen Santana Ruiz, Karina Ibarrola Hernández, Felipe Caurapán González, Claudio Esteban González Ávila, Cecilia Andrea Chales Cárdenas, Luis Omar Almonacid Serón, Ramón Antonio Álvarez Ruiz, Nicolás Eduardo Rivas Aqueveque, María Gladys Asencio Levicoy, Leonel Alberto Cárdenas Cuitiño, Ambrosio Olegario Hernández Almonacid, Nayadeth Alejandra Yáñez Pastor, Johana de Lourdes Cartajena Marchant, Hilda de Lourdes Chamia Pérez, Manuel del Jesús Alarcón Torres, Ema Rosa Mansilla Mansilla, Silvia del Carmen Paredes Gallardo, Sandra Marisol Mayerovich Penoi, Claudio Esteban González Ávila, María Ángela Barria Álvarez, Esteban Juan Efraín Gómez Vargas, María Haydée Asencio Levicoy, Sergio Alejandro Oyarzún Álvarez, Marcela Ingrid Contreras Panichine, Mabel del Tránsito Ruiz Huichaman, Patricia Estefania Gaona Candia, Astrid Torres Alvarez, Paula Garcia navarro, Carmen Rosa Vivar Cuitiño, Johana de Lourdes Cartajena Marchant, Andrea Daniela Torrealba Garate, Samuel Alexis Pacheco Esparza y Samuel Enrique Sánchez Sanchez todos profesores y domiciliados para en calle Los Carrera N°767, comuna de Castro, quienes interponen demanda de Juicio Ordinario Laboral de Cobro de Prestaciones, en contra la Ilustre Municipalidad de Quinchao, en su calidad de empleadora representada legalmente por don Washington Ulloa Villarroel, ignoro profesión, Alcalde de la comuna ambos con domicilio en calle Amunátegui número 01, Achao.

Expresan ser profesores en ejercicio contratados conforme a la ley 19.070 en las entidades de educación básica y media de la comuna de Quinchao. Señalan que la demandada adeuda a cada uno el aumento de la Bonificación Proporcional consagrada en la ley 19.933 del año 2004, cuerpo legal que estableció expresamente un “aumento de la Bonificación Proporcional” que, a esa fecha, se les cancelaba en virtud de la 19.410, la cual contemplaba un aumento

salarial para los docentes del sector municipal y entregaba un procedimiento para su cálculo. El incremento remuneracional de la ley 19.933 encontraba sustento en lo regulado su Título I, denominado “Incremento de las remuneraciones docentes” y en particular, el capítulo I de dicho acápite, nombrado como “Aumento de la Bonificación Proporcional”. De conformidad a lo expuesto, tanto la ley 19.410 y 19.933, se dictaron con la finalidad de aumentar las remuneraciones de los docentes tanto de quienes formaban parte de las instituciones educativas de entidad municipal como en las particulares subvencionadas. Así, en primer lugar, la precitada ley 19.410 estableció una bonificación proporcional mensual en su artículo 8, el cual preceptuaba que: “Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal y los de los establecimientos del sector particular subvencionado tendrán derecho a percibir mensualmente, a partir desde el 01 de enero de 1995, una bonificación proporcional a sus horas de designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 9°. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector particular subvencionado, los cálculos y el reparto se harán por establecimiento o sostenedor, según se perciba la subvención. "Esta bonificación será imponible y tributable, no se imputará a la remuneración adicional del artículo 3° transitorio de la ley N° 19.070, y el monto que se haya determinado en el mes de enero de 1995 sólo regirá por ese año. Desde el 01 de enero de 1996, una nueva bonificación proporcional, de similares características, sustituirá a la anterior.”“También recibirán dicha bonificación los profesionales de la educación de los establecimientos del sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se encuentren establecidas en un contrato colectivo o fallo arbitral".

El artículo 3 de la ley 19.933, estableció un nuevo incremento de las remuneraciones de los profesionales de la educación, el que, no obstante estar

derogado por la ley 20.903 de fecha 1 de abril de 2016, indicaba que: “Artículo 3º. Los aumentos de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley no se absorberán por la planilla suplementaria de que trata el inciso 2º del artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.410. La norma es clara al determinar que la procedencia de la bonificación que determinaba se extendía a la totalidad de los docentes que ejercían funciones ya sea como designados o contratados, sin hacer distinción a si pertenecían al sector municipal o estatal. La procedencia del pago del bono proporcional establecido por la ley 19.933 ha sido ratificada por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Además, el artículo 9, en relación a la destinación exclusiva de los montos otorgados a los sostenedores en razón del incremento salarial de que se trata, disponía, en lo pertinente que: “Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de aporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes. Los recursos que reciban los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados derivados de esta ley, por concepto de aumento de subvención, serán destinados exclusivamente al pago de los siguientes beneficios: incremento del valor hora vigente al 31 de enero de 2004; así como de los incrementos del valor hora para los años 2005 y 2006 dispuestos en el artículo 10 de esta ley y nuevo valor de la bonificación proporcional, del bono extraordinario y, cuando corresponda, planilla complementaria, establecidos en los artículos 83 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, y artículos 8º, 9º y 10 de la ley Nº 19.410.” Indicando que en sus liquidaciones de sueldo sólo se contempla, entre los meses de abril de 2012 y diciembre de 2016, lo pagado en

razón del “Bono 19.410”, siendo, en consecuencia, evidente el no pago del incremento de la ley 19.933.

Acerca del procedimiento de cálculo del bono proporcional adeudado, señala que conforme lo dispone el artículo 63 del Estatuto Docente, vigente a la época, establecía, en lo que interesa, que: “Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal y los de los establecimientos de sector particular subvencionado tendrán derecho a percibir mensualmente, a partir desde el 1 de enero de 1995, una bonificación proporcional a sus horas de designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 65 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 64”; por su parte, el artículo 65 dispone que para determinar la bonificación proporcional los sostenedores deben supeditarse a lo siguiente: a) Determinarán la bonificación proporcional establecida en el artículo 63 distribuyendo entre los profesionales de la educación que tengan derecho a ello, en proporción a sus horas de designación o contrato, el 80% de la totalidad de los recursos que les corresponda percibir en los meses de enero de 1995 y 1996, según el año de que se trate, por concepto de la subvención adicional especial a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 19.410.

De lo expuesto, se expresan los valores conforme a los siguientes criterios: a) la cantidad que la demandada recibió por la ley 19.933 durante el período transcurrido entre los años de 2012 a 2016, b) el 80% no pagado por la entidad demanda de la ley 19.933, c) los recursos mensuales que la demandada debió destinar al pago de la bonificación referida d) la división de dicho valor por la dotación anual de horas docentes, determinándose, de esta forma, e) el valor mensual por hora que correspondía pagar a los profesores, denominado “factor”:

Año	a)	b)	c)	d)	e)
2012	247.795.214	198.236.171	16.519.680	5850	2823

2013	261.504.774	209.203.819	17.433.651	5888	2960
2014	266.040.766	212.832.612	17.736.051	6018	2947
2015	280.334.351	224.267.480	18.688.956	6224	3002
2016	294.938.919	235.951.135	19.662.594	6647	2958

Sobre el plazo de prescripción de las prestaciones demandadas señalan que son actualmente exigibles dado que, la norma de prescripción que establece el Código del Trabajo en su artículo 510, no resulta aplicable en la especie, puesto que, si nos atenemos al tenor de la referida disposición en donde expone que “Los derechos regidos por éste Código prescribirán en el plazo de 2 años”, ésta hace aplicable a el referido plazo de 2 años sólo a los derechos regidos por el Código del Trabajo, de manera que, al estar establecido el pago de la bonificación proporcional en leyes especiales y no existiendo en ellas disposición alguna que regular la prescripción de la acción de cobro de las cantidades que ellas contemplan, hay que estarse a lo que la legislación ordinaria preceptúa al efecto, de modo que entran a regir las disposiciones que el Código Civil contempla al efecto, siendo el plazo de 5 años, según criterio de la Corte Suprema de Justicia, agrega.

De las bases de cálculo expuestas, los montos adeudados a cada trabajador son los siguientes:

- Lucía Odette Alba Hernández \$7.403.760.
- José Marcelo Araya Carrasco \$7.756.320.
- Sergio Alberto Ojeda Bontes \$7.756.320.
- Noelia del Carmen Paredes Cárdenas \$7.756.320.
- María Eugenia Guajardo Tureuna \$7.756.320.
- Víctor Manuel Pérez Frías \$7.756.320.
- Cristian Alfredo Pérez Vivar \$7.756.320.

- Marcela Carmen Campos Méndez \$7.756.320.
- Carolina Olea Alarcón \$7.756.320.
- René Eduardo Almonacid Serón \$7.756.320.
- Manuel Aliro Cheuquepil Andrade \$6.874.920.
- José Alfonso Álvarez Ruiz \$7.756.320.
- Héctor Joel Ojeda Ruiz \$7.756.320.
- Fabiola Oyarzún López \$7.756.320.
- Diana Paillán Subiabre \$7.756.320.
- Manuel Alberto Mansilla Mansilla \$7.756.320.
- Martina Silva Hernández \$7.051.200.
- Juan Álvarez Godoy \$7.756.320.
- Marcela Barría Vargas \$5.288.400.
- Luis Cárdenas Hernández \$7.756.320.
- Iván Sebastián Huaiquimilla Arriagada \$7.756.320.
- Sandra Patricia Vera Álvarez \$7.756.320.
- Marylyn Matas Ibarrola \$7.756.320.
- Rita Ojeda Sotomayor \$7.403.760.
- Vilma del Carmen Llauquén Llauquén \$7.756.320.
- Sandra Marisa Pichuncheo Bontes \$7.580.040.
- Violeta Isabel Mansilla Antimán \$7.580.040.
- Flor Bernardita Santana Vivar \$7.756.320.
- Valeria Andrea Velásquez Ruiz \$7.227.480.

- Fabián Ignacio Barrientos Sotomayor \$7.756.320.
- Gisela del Carmen Cárdenas Cuitiño \$5.288.400.
- Estefanía Gabriela del Carmen Labarca Gajardo \$7.051.200.
- Claudio Rodrigo Mansilla Vivar \$7.756.320.
- Juvenal Patricio Núñez Dimter \$6.874.920.
- Manuel Leonardo Barrientos Barrientos \$7.756.320.
- Carola Oyarzún Cárdenas \$6.698.640.
- Carlos Hernán Contreras Alvarado \$0
- José Mauricio Calbuante Loncón \$7.756.320.
- Víctor Hugo Alfonso Barría Álvarez \$7.756.320.
- José Hugo Levill Levill \$7.756.320.
- Walter Selin Pacheco Oliva \$7.756.320.
- José Adrián Álvarez Álvarez \$7.756.320.
- Martina Ignacia Silva Hernández \$7.051.200.
- Alex Francisco Soto Vivar \$7.756.320.
- María Angélica Avendaño Bontes \$7.756.320.
- Carlos Froilán Yáñez Delgado \$7.051.200.
- Ramón Arturo Oyarzún González \$7.227.480.
- Jaime Santiago Águila Cárdenas \$7.051.200.
- Carmen Julia Vera Pérez \$7.227.480.
- Verónica del Carmen Ulloa Oyarzún \$5.288.400.
- Gisela Victoria Garcés Álvarez \$7.227.480.

- David Antonio Lucero Ayala \$7.756.320.
- Luis Heraldo Cárdenas Águila \$7.756.320.
- Berardo Fabián Marchant Chequepil \$6.698.640.
- Jessie Carolina Zurita Mansilla \$7.227.480.
- María Magdalena Reyes Aguilar \$7.756.320.
- Luisa Palmenia Mansilla Mansilla \$7.756.320.
- Pilar Antonieta Altamirano Ortega \$6.346.080.
- Manuela Fabiola de Lourdes Álvarez Díaz \$6.698.640.
- Judith del Carmen Santana Ruiz \$5.640.960.
- Karina Ibarrolla Hernández \$6.346.080.
- Felipe Caurapán González \$5.817.240.
- Claudio Esteban González Ávila \$7.051.200.
- Cecilia Andrea Chales Cárdenas \$7.756.320.
- Luis Omar Almonacid Serón \$6.698.640.
- Ramón Antonio Álvarez Ruiz \$7.403.760.
- Nicolás eduardoRivas Aquevede \$7.756.320.
- María Gladys Asencio Levicoy \$6.874.920.
- Juan Efraín Gómez Vargas \$7.756.320.
- María Haydée Asencio Levicoy \$7.403.760.
- Sergio Alejandro Oyarzún Álvarez \$7.756.320.
- Marcela Ingrid Contreras Panichine \$7.756.320.
- Mabel Del Transito Ruiz Huichaman \$7.756.320.

- Patricia Estefania Gaona Candia \$7.756.320.
- Astrid Torres Álvarez \$7.756.320.
- Paula García Navarro \$5.288.400.
- Carmen Rosa Vivar Cuitiño \$7.756.320.
- Johana De Lourdes Cartajena Marchant \$7.756.320.
- Andrea Daniela Torrealba Garaje \$6.698.640.
- Samuel Alexis Pacheco Esparza \$7.756.320.
- Samuel Enrique Sánchez Sánchez \$7.756.320.
- Leonel Alberto Cárdenas Cuitiño \$7.756.320.
- Ambrosio Olegario Hernández Almonacid \$7.756.320.
- Nayadeth Alejandra Yáñez Pastor \$7.756.320.
- Johana de Lourdes Cartajena Marchant \$7.756.320.
- Hilda de Lourdes Chamia Pérez \$7.756.320.
- Manuel de Jesús Alarcón Torres \$7.756.320.
- Ema Rosa Mansilla \$7.756.320.
- Silvia del Carmen Paredes Gallardo 7756320
- Sandra Marisol Mayerovich Penoi 7756320
- Claudia Esteban González Ávila 7756320
- María Ángela Barría Álvarez 7756320.

Solicita en definitiva que sea acogido lo solicitado por los demandantes en su demanda, declarando que: a) La demandada debe proceder al pago, a cada uno de los demandantes, de las cantidades adeudadas en razón del incremento de remuneración establecido por la ley 19.933, debidamente reajustadas, según lo

establecido por el artículo 63 del Código del Trabajo, en el monto ahí indicado, o el que el tribunal determine conforme el mérito del proceso. b) Que la demandada debe pagar las costas de la causa.

SEGUNDO: Que, compareció la parte demandada, quien, en lo principal de su escrito de contestación, opone excepción de pago, que la demandada pago el aumento del bono proporcional regularmente, detallado en cada liquidación de todos los profesores demandantes, como “BONIFICACION LEY 19410” que es la ley madre del “aumento de la bonificación proporcional”, situación que estaría reconocida en la demanda, señala.

Opone excepción de prescripción de los derechos y prestaciones reclamadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo, norma que señala, “los derechos regidos por este código prescribirán en el plazo de dos años, contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”. En efecto, como se afirma en la demanda, las prestaciones que pretenden los actores desde el mes de abril de 2012 hasta el mes de diciembre de 2016, gran parte de sus pretensiones han prescrito, pues el plazo de dos años establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo se encuentra absolutamente vencido y en consecuencia prescrita todas las prestaciones supuestamente devengadas en los dos años anteriores a la notificación de la demanda. En consecuencia, solicita rechazar la acción interpuesta respecto del periodo entre el mes de abril de 2012 hasta el mes de septiembre de 2015.

Opone excepción de prescripción extintiva de 6 meses según lo establece el inciso segundo del artículo 510 y para el evento que la relación laboral se encontrare terminada, la acción del trabajador para ejercerla prescribe dentro del plazo de seis meses contados desde la terminación de los servicios.

Opone también, excepción de prescripción extintiva del artículo 2514 del código civil de cinco años, por lo que solicita al tribunal declarar prescritos todos los

supuestos derechos de los actores de autos, cuya exigibilidad es mayor a cinco años contados hasta la notificación de la demanda, o en su defecto, hasta la presentación de la misma.

Opone excepción de finiquito; el finiquito atendido su carácter transaccional, es una forma de extinguir derechos y obligaciones laborales, de modo que, considerando su carácter liberatorio, no cabe que los suscriptores de dicho instrumento y, en particular, el trabajador quien declara que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su relación laboral, solicite con posterioridad cualquier prestación que se encuentre supuestamente impaga. Para analizar el poder liberatorio del finiquito, una vez finalizada la relación laboral, es preciso señalar que este al estar firmado ante ministro de fe por cada docente y el representante de la Corporación Municipal de Quinchao, tiene doble función, por un lado (trabajador) fuerza ejecutiva, pero a su vez también tiene, por el lado del empleador, poder liberatorio en todo lo que las partes no demuestren desacuerdo. Por tanto, la demanda de autos deberá ser desestimada con respecto de los docentes demandantes correspondientes, por haberse verificado a su respecto el efecto liberatorio con respecto a las prestaciones reclamadas con motivo de la suscripción del finiquito de los contratos de trabajo respectivos.

Opone excepción de falta de legitimación activa, y al efecto señala que aparecen demandando prestaciones laborales actuales docentes que al tiempo de supuestamente generarse el derecho se desempeñaban como asistentes de la educación, o no trabajaron para la entidad demandada en el o los años que señalan en la demanda, o no trabajaron las horas necesarias para generar el derecho a cobrar bono demandado. Agrega, para que se ejerza una acción deben concurrir, la existencia de un derecho, de un interés, de una calidad, de una capacidad, y que los requisitos para obtener tutela jurisdiccional es que la demanda se entable por el sujeto al cual corresponda la acción y se dirija en

contra del sujeto pasivo de la misma, que es la legitimación, y que puede ser activa o pasiva, en el caso de autos se configura claramente una falta de legitimación activa, toda vez que demandan personas asistentes de la educación que ahora pasaron a ejercer la docencia o personas que no trabajaron para la corporación durante los años que se señala en la demanda.

En subsidio de lo anterior, contesta la demanda de cobro de prestaciones interpuesta, solicitando se rechace por ser esta totalmente improcedente por las siguientes consideraciones: En primer lugar, niega todos los hechos señalados, siendo de carga de la contraria acreditar lo aseverado.

Explica que la Ley 19410 del año 1995, estableció una Subvención Adicional Especial, cuyo objetivo era incrementar las remuneraciones de los profesionales de la educación, para lo cual consideraba el pago de una bonificación proporcional que debía distribuir entre los docentes en atención a sus horas de contrato, dicha bonificación comprometía el 80% de los recursos y una planilla complementaria correspondiente al 20% restante, para aquellos profesores contratados con una remuneración total inferior a \$130.000 y \$150.000 mensuales las que correspondía en ese entonces a la remuneración total mínima. También se creó un bono extraordinario que corresponde al remanente de la subvención adicional especial, una vez descontadas la bonificación proporcional y la planilla complementaria si lo hubiese. Con posterioridad, las leyes 19715 y 19933 establecieron un aumento de la subvención de la bonificación proporcional.

Agrega que hay que los recursos de la ley referida por concepto de aumento de la subvención, antes de la modificación introducida por la ley 20.158, tal como lo señala el inciso primero del artículo 9 de la ley 19.933 tenían como fin único el pago de remuneraciones de los profesores, y para poder financiar los gastos que generen la bonificación proporcional se deberá ocupar la subvención adicional especial del artículo 13 de la ley 19410. Con posterioridad al año 2010 los

gastos por concepto de bonificación proporcional solo han podido solventarse con los recursos provenientes de la subvención adicional especial prevista en el artículo 13 de la ley 19410. Atendido lo anterior, es dable preguntarse si en las liquidaciones de los docentes se debe establecer una glosa denominada “bonificación proporcional mensual de la ley 19933” y una diferente denominada “bonificación proporcional mensual de la ley 19410”. Así la demanda reconoce en su página 7, N°21 “ en otro ángulo de la interpretación contextual en análisis, debe llamarse la atención que lo que obro el artículo 1 de la ley 19933 fue un reemplazo en el valor de la bonificación proporcional, sin tocar el ámbito de sus beneficiarios; ello es así por cuanto el bono proporcional se remite expresamente en su forma condiciones y procedimiento a los artículos 8 a 11 de la ley 19410, normas estas últimas que la establecieron, alzándola como un derecho de los educadores, en general” (sic) A mayor abundamiento y de acuerdo a instrucciones expresa impartidas por la Contraloría General de la Republica al Ministerio de Educación, este ordenó a todos los sostenedores, de hacer el pago del beneficio como un solo concepto y no por separado como es lo que pretende la demandada.

De lo expuesto, quedaría de manifiesto la improcedencia de las prestaciones demandadas: Estas se encontrarían pagadas en aplicación de lo establecido por la Contraloría General de la Republica, conforme al dictamen N° 78557, lo anterior por expresa instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación a cada sostenedor de establecimientos educacionales, como es el caso. Objeta, además, el monto de las prestaciones demandadas que no han sido ratificadas, que van en contra de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República y de la forma en que las partes estipularon el pago del beneficio.

No procede el pago de reajustes e intereses, así el Estatuto Docente que ha establecido las remuneraciones a que tienen derecho los profesionales de la educación. Las cantidades percibidas por esta vía solo estarán afectas a algún

tipo de reajuste en la medida en que así lo establezca la norma que lo ha creado, lo que excluye la aplicación supletoria de otro cuerpo normativo. En este mismo orden de ideas la Contraloría General de la República señala en diversos dictámenes respecto de la reajustabilidad de las obligaciones de dinero cuyo título directo es la ley, los que se deben percibir en sus valores nominales u originarios. Tratándose el aumento del Bono Proporcional de un valor nominal u originario, establecido así por la ley, no procede un pago en exceso. Lo que en la especie resulta improcedente aplicar los intereses y reajustes demandados.

Sostiene que no procede ser sancionada con el pago de las costas del juicio, toda vez que a nuestro entender, no existen fundamentos legales ni fácticos que permitan concluir que las prestaciones demandadas son procedentes.

TERCERO: Que con fecha dieciocho de octubre de 2018, se celebró audiencia preparatoria, con la asistencia del abogado Ignacio Álvarez Vera por la actora y abogados don Héctor Gálvez y don Milton Cuevas Jara por la demandada. Se expuso por el juez la demanda y la contestación, y tras tener por evacuado el traslado respecto de las excepciones opuestas, se determinó dejar su resolución para definitiva.

Luego se efectuó el llamado a conciliación, sin embargo esta no prosperó, por lo que acto seguido se establecieron como hechos a probar, los que a continuación se indican: 1.- Efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas y sus montos. 2.- En caso de adeudarse las prestaciones demandadas, procedimiento para la determinación del bono proporcional que le corresponde a cada uno de los trabajadores, carga horaria de los demandantes, dotación docente de la demandada e ingresos de la demandada por la Ley 19.933 y 19.410, percibidos entre abril de 2012 y diciembre de 2016. 3.- Destino y uso que le dio la demandada al bono recibido y además los términos y condiciones del finiquito de las personas que alegan la excepción de finiquito. 4.- Los trabajadores

que dejaron de prestar servicios para la demandada y fecha de desvinculación de cada uno de ellos. 5.- Existencia de los hechos fácticos que configuren la excepción de prescripción.

CUARTO: Que con fecha seis de febrero de 2019 se realizó audiencia de juicio, con asistencia abogado don Matías Sandoval, por la actora y abogado don Héctor Caro y abogada doña Marcela Vallejos Norambuena por la demandada; y conforme al acuerdo entre las partes, se establece que la parte demandada incorporará su prueba en esta audiencia, mientras que la demandante lo hará en una audiencia posterior, instancia en la cual se procede a incorporar las pruebas de la actora. Se continuó audiencia de juicio el 18 de marzo d 2019, con asistencia del don Matías Sandoval Araneda, por la parte actoral; y mismos abogados don Héctor Caro y don Milton Cuevas, pro la demandada.

PRUEBA PARTE DEMANDANTE:

PERICIAL:

QUINTO: Que comparece el perito de la actora don Sergio Ramón Zapata Barros, quien señala que lo solicitado era determinarse los saldos adeudados y el destino dado a los recursos por subvención Ley 19.933. Se basó en antecedentes que la Municipalidad le entregó en audiencia: eran Padem, estatutos de la Corporación, libros de contabilidad, comprobantes de ingresos, depósitos bancarios y registros contables. Agrega que con los análisis de la contabilidad llegó a la siguiente conclusión: que la Corporación no lleva contabilidad que permita llevar un control de la le Ley 19.933, tanto para el registro de ingresos, que son los aportes del Ministerio de Educación, como su aplicación en en el pago, puesto que las cuentas utilizadas tienen un carácter genérico, incluyen toda la subvención. Y para ver los pagos analizó la cuenta remuneraciones de los profesores, donde deben estar considerados todo: sueldos base, asignaciones, etc., que tienen que estar considerado en el mayor de remuneraciones, La cuenta

de remuneraciones no se encuentra desagregada ni el de subcuenta, o sea, si hay una cuenta de remuneración genérica en el mayor tendría que haber una subcuenta contable que permita ver que se pagó por sueldos base, por asignación de zona, especiales. En el sistema educacional hay una serie de asignaciones que la ley establece y el incremento de la Ley 19.933 tiene que establecerse para los efectos de rendir cuenta al Ministerio de Educación. Entonces, la cuenta remuneración no se encuentra desagregada ni el de subcuenta, menos se indica en los libros de remuneraciones del período demandado. Desagregar significa separar, Con el objeto de tener la certeza del incremento de las remuneraciones, se procedió a efectuar un análisis de las liquidaciones durante el periodo demandado. El incremento Ley 19.933 no se incluye en ningún haber de los sueldos. Se hizo un análisis de los la remuneración básica nacional de cada uno en el periodo, concluyendo que el valor de la por hora cronológica a cancelar a los docentes, corresponde exactamente a los valores mínimos fijados por el legislador de acuerdo a lo establecido en la ley. Para calcular los valores adeudados se considera conforme a la Ley 19.410, artículo 10, dice que se calcula un 80% de la subvención Ley 19.933, dividido por el total de las horas cronológicas de los profesores y multiplicado por cada una de las horas de asignación docente y eso da un factor y este factor se multiplica por las horas que tenían de dotación. En consideración a ello, concluye, uno, que la contabilidad no podría ilustrarle el destino dados a los fondos, tanto para los ingresos como para los egresos, como asimismo en el análisis de los libros de remuneraciones y las liquidaciones, llega a la conclusión que la Corporación adeuda a los demandantes el incremento de la Ley 19.933, ya que no hay evidencia que haya hecho en un desembolso, puesto que no se refleja en la contabilidad, como tampoco se incorpora en las liquidaciones se por concepto específico, o dentro de cualquier estipendio considerado en los haberes.

Preguntado por el abogado si se percató de docentes que no tuvieran contrato, dice que no, reviso selectivamente, no todos. Si se encontró con personas que tenían la calidad de asistentes de la educación que figuran en la demanda, responde que no se fijó. Vio los contratos solamente, no se encontró con docente que no tuviera contrato. Se le pregunta, si vio la subvención cuando se depositó a la Municipalidad, dice que vio los comprobantes de ingresos, pero s, pero en la contabilidad, se le imputó a una cuenta genérica y dentro de esta cuenta genérica está la subvención Ley 19.933 y otros que manda el Ministerio. . Se le pregunta, si vienen detallados los ítems que componen la subvención, responde que vienen desglosada la Ley 19.933. Se le pregunta, si la subvención se hace desglose de los ítem, responde que sí. Se le pregunta donde lo vio, dice que hay una liquidación del Ministerio que indica cuales son los montos, por qué conceptos. Agrega que sí vio el desglose, y revisó los antecedentes, pero no podría señalar si en este caso específico, lo vio. Agrega que en su informe dice “que no se individualizó en el mayor contable la subvención Ley 19.933, aunque la Corporación cuenta con esa información de manera extracontable y fue entregada al perito. Preguntado por el Abogado Sr. Cuevas, si vio que el Ministerio de Educación entregó el dinero específicamente indicado por la ley tanto, responde exactamente”. Se le pregunta, si es así, cuanto recibió por esa ley la Corporación, responde que en el depósito venía indicado en forma genérica, así el año 2012 247 millones. Pregunta abogado. . deci que respecto de la as liquidaciones , estaban todos los haberes, descuentos y líquido pagado, dice que no estaba considerado s los de la Ley 19.933. Agrega que esta ley estableció que habría cálculos en incremento de remuneración a los profesores particulares subvencionados, como a los de la Corporación, es un aumento adicional del artículo 9 de la Ley 19.933; alude al estatuto docente artículos 63 y 65. Agrega que la ley 19.410, está comprendida en las liquidaciones. Se pregunta si se percató de personas que tenían calidad de profesores, dice que

hizo el cálculo porque le llegó la nómina. Si es así, dice el abogado, entonces su cálculo está equivocado, responde que no podría afirmar si hay personas de la nómina que no eran docentes. Se le presenta el caso de Pilar Altamirano, no trabajó 2012, 2013. Se le pregunta si había personas que no eran profesores, responde "sí, no podría decirle." También hay asistentes de la educación, dice el abogado, responde que no lo sabe. Pregunto al abogado, si se dio cuenta que había personas con finiquito, anexos del 2016, dice que no revisó los finiquitos, se le dice que en los anexos hay finiquitos, responde que tomó selectivamente a las personas. Pregunto abogado, responde que si hay personas con finiquito, no tendrían derecho al bono. Abogado, respecto de Martina Silva, que no trabajó en 2012-2014, no le corresponde bono. Agrega abogado que aparece con 6 millones, el perito dice que si es así, sí, hay error de cálculo.

PRUEBA DE OFICIOS DEMANDANTE:

- 1.- Dirección Provincial de Educación Castro, 259 del 12 de mayo 2018, se señalan montos entregados Ley 19.933 y 19410 y hay 5 cuadros del 2012 a 1 a 2016, enero a diciembre, cada año a Quinchao, leyes señaladas; por primera tabla: enero 2012. Ley 19.410, 56 millones y fracción, Ley 19.992, 247 millones y fracción y así detallados cada año.
- 2.- Exhibición documentos. Los Padem 2012-2016, plan anual educación municipal Quinchao, cada ítem capítulo VI, 2012 - 2016 , cada uno presupuesto cada año. En relación la letra a) de la exhibición.
- 3.- Contratos de trabajo de cada trabajador y anexos, fueron exhibidos por la demandada,

4.- Liquidaciones 2102.2016, 8 archivos, ya incorporados por al demandante: no aparece dentro de los haberes, aparece el ítem Ley 10.933.

5.- Los presupuestos educacionales, mismo que en los Padem.

5.- Libro remuneraciones desde enero-diciembre de cada año 2012-2016, nombre, cédula, área negocio, descripción cargo, días pagados, rente mínima básica nacional, total asignaciones Ley 19.410, bono extensión Ley 19.410, total haberes, base imponible, base imponible, base imponible, descuentos legales, descuentos internos y líquido a pagar. Hace presente que en esa exhibición no aparece ítem Ley 19.933 (letra e)

6.- (Letra f) Acta de Concejo Municipal: cada uno, de 2012-2016, aprueba Padem.

7.- Registros contrales, detallan 2012-2016, ingresos, egresos Corporación Municipalidad Quinchao. Se señalan los montos que se transfirieron en cada período. Transferencia de la Municipalidad a la Corporación.

8.- (letra g) No fue exhibido, registro contable, registro ingresos y egresos Ley 19.933 y 19.410, periodos demandados.

PRUEBA PARTE DEMANDADA

PERICIAL:

SEXTO: Que comparece el perito contador auditor con mención en derecho tributario don César Alberto Cárcamo Santana, quien expone su informe. El objetivo: determinación del monto pagado y/o adeudado por la prestación laboral la bonificación proporciona Ley 19.410 pagada por la Corporación Municipal de Quinchao a los profesores municipales período 2012-2016 y emitir opinión si aplica aumento de la bonificación Ley 19.933. En este caso, para emitir opinión revisó Estatuto Docente, leyes 19.410, la 19.933 y 20.158. Señala antecedentes revisados: demanda, acta audiencia preparatoria, liquidaciones. Ingresos de las

leyes 19.410 y 19.933, montos subvención. Total sueldos, montos déficit y otros archivos: montos pagados por dichas leyes, comparó liquidaciones; la metodología fue análisis antecedentes y calculo prestación bonificación período 2012-2016. Base de cálculos según artículos 63 y 65 Estatuto Docente. Para determinar la bonificación artículo 63 los sostenedores de establecimientos educaciones del 100% subvención Ley 19.410, calculan el 80% (para no sobregirar); este 80% se divide por las horas contratadas al mes de febrero 2016 y esto arroja un factor que se divide en 12, que determina el factor mensual fijo que por concepto de bonificación proporcional se deberá pagar en febrero a noviembre 2016. Ese factor debía multiplicarse por el número de horas contratadas semanales para cada docente, lo que determina el monto mensual a pagar por tal concepto. Ley 20158, beneficios a los profesionales de la educación, artículo 1, Ley 19.933 inciso 4. Se expone sobre el cálculo. Agrega que en consecuencia, el valor de la hora pagar por bonificación se debió registrar en diciembre de cada año, a contar de 2006, según subvención para establecimientos que sean reconocidos a partir del año 2007 y 2010. Por tanto, para los períodos para calcular el aumento del bono que se debió recibir hay que ir a los remuneraciones, etc. da el bono proporcional Ley 19.410. Explica el análisis hecho. Analizó jornadas, carga horaria, suma total suma total liquidaciones anuales. Los montos Los montos globales leyes en página 11, son los globales del presupuesto, hay un déficit que la Municipalidad cubrió. Agrega que hay un punto complejo en páginas 9-13 del informe. En página 17 resume resultados del ejercicio demandado y total acumulado. Así las cosas, concluye que la bonificación proporcional en las remuneraciones, percibe el profesional, cuyo monto es determinado por el sostenedor, cuyo monto es establecido y los de los establecimientos técnicos profesionales, el beneficio se financió con los aportes de la Ley 19.410 y 19.933. Para el sector municipal solo se financió con los aportes de la Ley 19.410. Así, acceden todos los docentes del sector municipal sin

considerar la calidad con que ingresan a la dotación y en cualquier forma de contrato. Igualmente respecto del sector particular subvencionado. Igual los profesionales de la educación técnico-profesional. Conclusión punto 2: existe una confusión entre los actores del sector educacional por cuanto se confunde su aplicabilidad, donde la Ley 19.933 aumenta la subvención para los sostenedores del sector municipal como para los del sector particular subvencionado en sus remuneraciones. Por tanto, los docentes del sector municipal incrementan el valor hora cronológica y su monto básico y otras asignaciones especiales que se calculan en base a dicha remuneración sumados los reajustes de los funcionarios del sector público y a los docentes del sector particular subvencionado destina exclusivamente dicha subvención al aumento del bono proporcional mensual a que se refiere dicha ley, he aquí la confusión legal en su aplicación. Punto 3: Tratándose de docentes que prestan servicios a los establecimientos de las Municipalidades, el bono extraordinario con cargo a de la Ley 19.410, luego de pagada la bonificación proporcional, dice, sobre eso, que respecto a los factores de cálculo, los presentados por la demanda para determinar la misma no procederían, por cuanto el factor utilizado por la Corporación corresponde a los del año 2006 registrada, conforme al procedimiento señalado en el N° 6 de su informe. En cambio, la actora realiza el cálculo por año demandado; Además, las bases de cálculo son diferentes, ya que la Corporación hace el cálculo y pago de la bonificación sobre la subvención Ley 19.410 solamente, que es lo correcto, y la demandada hace el cálculo sobre la base de la sumatoria de la subvención de la Ley 19.410 y 19.933, que no correspondía aplicar a sostenedores sector municipal. Punto 5, concluye que se trataba el mayor de remuneraciones de docentes municipales como particulares.

Abogado pregunta si hay saldos pendientes de la Ley 19.933, responde que en este caso, no; y esa ley se utiliza para los diferentes conceptos del sector municipal; en este caso, la Corporación dentro de la liquidación tiene un ítem que

es bono o asignación Ley 19.410.. Respecto de los fondos de la Ley 19.933 dice que le la Corporación aplica los fondos a las remuneraciones docentes

Pregunta abogado demandante, contesta que ha hecho seis informes previos sobre bono proporcional. Se le pregunta sobre llega a las conclusiones con el análisis de los antecedentes, como puede concluir que el ánimo del legislador respecto Ley 19.410 y 19.933, responde que se complementan una a la otra, vio fuentes, jurisprudencia. Se le pregunta si la Corporación no recibe ningún otro tipo de ingreso aparte de lo que señaló, responde que esos son los ingresos. Según información proporcionada, asumiendo que ahí está toda la información Respecto de lo recibido por las leyes indicadas esta en un cuadro del informe por mes y por año y que según sus cálculos, concluye que el dinero se pagó como remuneración. Se pregunta si contablemente la Corporación sobre recepción de ingresos, lleva cuenta separada o una sola cuenta, responde que la 19.410 esta aparte y la otra esta adjunta a la 19.933. Dentro del ítem subvención general está la Ley 19.933.

PRUEBA DE OFICIOS:

a) Oficio del Ministerio de Educación, ORD 07/1164, de fecha 02 de abril de 2018, emitido por el Jefe de la División Jurídica Tomás Henríquez Carrera, referente a los siguientes puntos:

1. Informe el procedimiento de cálculo que ocupan las Corporaciones Municipales para el pago de las bonificación proporcional de la Ley 19.410 y 19.933, con precisión si la determinación de los montos se hace por establecimiento educacional, por dotación docente comunal, con indicación de las horas de cada profesor, la forma en que los sostenedores municipales deben invertir dichos recursos y si existe diferenciación entre colegios municipales y particular subvencionado.

2. El traspaso de fondo del Ministerio por Ley 19.410 y 19.933 a la Corporación Municipal de Quinchao.

3. Además, se da lectura suscita de los documentos incorporados al sistema SITMIX por parte del Ministerio de Educación dentro del oficio previamente referido.

b) Oficio de la Dirección del Trabajo que indica el procedimiento de cálculo que debiesen ocupar las Corporaciones Municipales para el pago de la bonificación proporcional de la Ley 19.410 y 19.933.

DOCUMENTAL:

1) Liquidaciones de remuneraciones de los docentes demandantes en los meses de abril de 2012 a diciembre de 2016.

2) Finiquitos de los demandantes respecto de quienes se oponen a la excepción de finiquito.

3) Ordinario 2752 del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 28 de noviembre de 2016.

4) Ordinario 7-0036 del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 8 de enero de 2016.

ALEGATOS:

PARTE DEMANDADANTE:

La demandante, haciendo sus observaciones, expresa que se ha acreditado que las prestaciones demandadas se adeudan, ya que no se ha acreditado que los fondos recibidos por la Ley 19.933 hayan sido destinados exclusivamente al pago de remuneraciones. Luego, dice que el objeto del juicio ha sido materia de la jurisprudencia, ya que se ha discutido si los fondos de la Ley 19.933, los profesores municipales tiene derecho que se les pague, la jurisprudencia ha sido

vacilantes, pero la actual, sentencia que indica, de 18 febrero 2019, acogió recurso de unificación en orden a que según la Corte suprema, la Ley 19.933 corresponde a los profesores; y conforme al procedimiento de cálculo señalado en la causa, informe pericial y conforme a la exhibición de los documentos en que se señala que la Corporación recibió dineros de la Ley 19.933. Además, están las liquidaciones de los trabajadores en que ítem Ley 19.933 no aparece, por lo que corresponde a la contraria acreditar que la bonificación fue pagada, lo que no ha ocurrido. En otro punto, dice que el informe pericial, no obstante insistencia de la contraria respecto a profesores precisos, el perito estableció que si un trabajador no estaba laborando el 2012, no hubo ninguna liquidación para hacer el cálculo, por ende, el cálculo establecido en el informe es incorrecto. En el informe se señala lo adeudado para cada profesor y si dichos montos se hubieran señalado, serían montos simulados. Alude al caso de Pilar Altamirano. Además, otras cuestiones, corresponde a la contraria probar sobre los trabajadores que habría operado la excepción presentada; respecto que no se hubieran prestado servicios para la Corporación. "Pero aun así no es motivo, caso acogerse parcialmente no es motivo para el rechazo de la acción completa; y respecto de los trabajadores que efectivamente prestaron servicios durante el año 2012, a los que se ha acreditado que no se les pagó. En fin, la contraria no ha acreditado que se les pagó la bonificación, es que se debe dar lugar a la demanda, con costas.

ALEGATO DE LA DEMANDADA:

A continuación el abogado don Héctor Caro Gálvez, por la demandado expresa que se presentó excepción de pago, ya que los aumentos reclamados, como bono proporcional Ley 19.933, que se concede en virtud Ley 19.410, se encuentra pagado, como se desprende de las liquidaciones, lo anterior es corroborado por el perito ya que acreditó que la base de cálculo para el pago de la bonificación de la

subvención Ley 19.410 solamente y no sobre la base de las sumatorias de ambas subvenciones, como lo solicita la demandante, lo que corresponde pagar a los actores sector municipalizado. Del peritaje aparece que a la las Municipalidades le quedó excedente Ley 19.933 por los años 2013 y 2015 por \$ 6.698.266, sería lo que debería por concepto de lo se pagó por Ley 19.933. Por otro lado dice que se presentó excepción de prescripción insistiendo en las motivaciones de la demanda, por lo que pide se rechace la acción período mes de abril 2012 hasta el mes de septiembre 2015, fecha notificación demanda, respecto de todos los docentes. Respecto de docentes sin relación vigente, prescripción por artículo 71 Estatuto Docente. En relación al 510 inciso 2!, prescripción de seis meses, contado desde la terminación de los servicios por los actores que señala. Además, sobre la excepción de finiquito, respecto de los que fueron presentados en la audiencia anterior, quienes firmaron sin reserva. También, presentaron excepción de legitimación activa respecto de los actores que a la época se desempeñaban como asistentes de la educación, respecto de los que señala. En relación al oficio 07-1165 del 2 de abril de 2018 del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, é que la Ley 19.933 reemplaza exclusivamente para los profesionales de la educación particular subvencionada en la bonificación proporcional establecida en el artículo m8 de la Ley 19.410, que rige para los sostenedores municipales. Finalmente, dice que queda de manifiesto que los recursos entregados con cargo a la Ley 19.933, independientemente que estén pagados en nuestro, deben ser destinados al pago de la bonificación proporcional.

Abogado don Milton Cuevas expresa que los actores dicen que ellos deben acreditar el pago, que lo han hechos, hay pericia que lo dice. Controvierte con lo que dice el informe del perito Sr. Zapata, en cuanto a que se adeuden 807 millones. Dice que la verdad es que las prestaciones de la demanda no se condicen con lo ocurrido. Alude al caso de Carlos Cartes, quien aparece en años

2012, 2013 con cero; y en el informe aparece Cartes con 3 millones y fracción si se revisa antecedente, eso no se puede deber. También alude al caso de Silvia Hernández, quien tiene periodos sin trabajar. Por tanto, dice que el peritaje fue muy genérico, sin revisarse cada uno de los partes. Es un trabajo desprolijo, no da cuenta de la metodología. Dice el perito que se basa en los montos que le llegaron, no obstante que este acreditaba que ingresan a la Corporación son los mismos que se destinaron al pago de remuneraciones. Así, no existiendo ningún monto que se haya acreditado que se haya destinado a otro fondo que no sea el pago de remuneraciones, corresponde tener por acreditado que se pagó.. Por tanto se debe rechazar la demandada, con costas.

SEXTO: Que en esta causa se presentó un grupo de personas, presentándose como profesores, quienes demandan a la Corporación Municipal de Quinchao, señalando que ésta les adeuda el aumento de la bonificación proporcional de la Ley 19.933 d del 2004, el cual esa fecha se les cancelaba en virtud de la Ley 19.410. Agregan que la Ley 19410, estableció la bonificación en artículo 8. Luego el artículo 3 d la Ley de la Ley 19.933 estableció un nuevo aumento de las remuneraciones. Se alude luego al artículo 3 de la Ley 20.903 de abril de 2016, que dice que los aumentos remuneraciones profesores municipales por aplicación de esa ley no se absorberán por la planilla del inciso 2° artículo 4 Ley 19410. Que la norma es clara de la procedencia de la bonificación se extiende a todos los docentes sin distinguir si eran del sector municipal o no. También se invoca el artículo 9, no se dice que ley que habla de los recursos que obtengan los sostenedores serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones. En cuanto al procedimiento del cálculo del bono se indica el artículo 63 del Estatuto Docente y también el 65. En consecuencia, saca y señala los valores que se adeudan por años 2012 a 2016 a los actores.

SEPTIMO: Que la demandada opuso excepciones: de pago, de prescripción, de finiquito, de legitimación activa. Subsidiariamente se contesta la demanda, pidiendo el rechazo. Se señala que la Ley 129410 estableció la subvención adicional especial para incrementar remuneraciones, considerando al efecto una bonificación proporcional que comprometía el 80% de los recursos y planilla complementaria del 20% restante y también se creó bono extraordinario del remanente de la subvención adicional especial una vez descontada la bonificación proporcional y la planilla complementaria. Luego, las leyes 19.715 y 19.933 establecieron aumentos de la bonificación. Se agrega que los recursos de la ley referida, como lo señala la ley 19.933 tenía como único fin el pago de remuneraciones para poder financiar los gastos de la bonificación donde se deberá ocupar la subvención adicional especial del artículo 13 Ley 19.410. Agrega que después de los gastos por bonificación solo han podido solventarse con recursos de la subvención adicional especial del artículo 13 de la Ley 19.410.

De lo anterior quedaría de manifiesto la improcedencia de las prestaciones demandadas, pues éstas estarían pagadas conforme a lo que estableció la Contraloría, por instrucción del Ministerio de Educación.

OCTAVO: Que de la demanda y su contestación se extrae que la pretensión de la actora es obtener el pago del aumento de la bonificación proporcional de la Ley 19.933, frente a lo cual la demandada alega no deber, toda vez estos dineros se habrían pagado. Se hará lugar por estimarse que la autoridad edilicia aplicó los fondos en cuestión recibidos en debida forma según se verá, por lo cual ella en consecuencia hizo pago.

Para dilucidar esta cuestión es necesario establecer si el aumento en cuestión, de la referida ley es aplicable a los profesionales de la educación del sector municipal, calidad de los demandantes, o solo a los profesionales de la educación del sector particular subvencionado; y, además, si los recursos obtenidos por el

sostenedor de establecimientos del sector municipal, calidad del demandado, fueron destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes.

NOVENO: Que para entender el alcance de la pretensión de la actora es necesario referirse a la naturaleza de la bonificación proporcional. Al respecto, esta fue creada por el artículo 8 de la Ley 19.410, norma incorporada al artículo 63 de la Ley 19.070, esto es el Estatuto Docente, actualmente derogada, no obstante encontrarse vigente a la fecha de los hechos base de la pretensión actuarial, el cual señala: “Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal y los de los establecimientos del sector particular subvencionado tendrán derecho a percibir mensualmente a partir desde e el 1 de enero de 1995, una bonificación. Proporcional a sus horas de designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 9°. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector particular subvencionado, los cálculos y el reparto se harán por establecimiento o sostenedor, según se perciba la subvención. . . . También recibirán dicha bonificación los profesionales de la educación de los establecimientos del sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se encuentren establecidas en un contrato colectivo o fallo arbitral.”

Esta bonificación, a través de la ley 19.598, artículo 2 del año 1999 adquirió un carácter permanente. En el caso de os profesionales de la educación de establecimiento educacionales del sector particular subvencionado la bonificación proporcional fue sustituida en las misma forma, condiciones y procedimiento por las leyes 19.598, 19.715 y 19.993.

La misma ley, con el fin de financiar esta bonificación y otros gastos establecidos en ella, crea la subvención adicional especial (SAE), como lo señala en su artículo 13: "A partir desde el 1 de enero de 1995, se pagará a los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación de 1993, una subvención adicional especial para ese año", subvención que a través de diversas normas fue adquiriendo carácter permanente.

DECIMO: Que el cálculo de la bonificación adicional especial fue establecido en el artículo 10 de la Ley 19.410, incorporado como artículo 65 de la Ley 19.070 el cual se realizaba así: : "a) Determinarán la bonificación proporcional establecida en el artículo 8°, distribuyendo entre los profesionales de la educación que tengan derecho a ello, en proporción a sus horas de designación o contrato, el 80 % de la totalidad de los recursos que les corresponde percibir en los meses de enero de 1995 y 21996m según año de que se trate, por concepto de subvención adicional especial a que se refiere el artículo 13 de esta ley"

UNDECIMO: Que la Ley 19.933 del año 2005 de igual forma que sus predecesoras 19. 598 y 19.715, busca mejorar las remuneraciones de los profesores, lo cual se realiza aumentando la subvención educacional general que reciben los establecimientos municipales y particulares subvencionados regidos por el DFL N° 2 de 1998, también señala en su artículo 9, inciso 1°: "Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley N° 3.166 de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de aporte en su caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes." Agregando a continuación que los sostenedores, también señala en su artículo 9 inciso primero: "Los recursos que obtengan los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados deberá destinar el aumento de la subvención general exclusivamente al pago de

los siguiente beneficios: aumento de la bonificación proporcional, bono extraordinario, Y cabe hacer notar que no señala ningún procedimiento específico a las municipalidades e la distribución de los aportes obtenidos por la ley .

DUODECIMO: Que de lo expuesto se tiene que los sostenedores de establecimientos educacionales del sector municipal, en este caso la parte demandada, tienen la obligación de destinar los recursos por aumento de subvención o aporte, según corresponda, por la Ley 19.933, exclusivamente al pago del de remuneraciones docentes para los cual la ley establece un procedimiento específico, a diferencia del señalado a los sostenedores de los establecimientos del sector particular subvencionado.

DECIMO TERCERO: Que, como orientación para hacer el pago de los fondos otorgados por la Ley 19.933, los sostenedores de establecimientos municipales, recurrieron a la Contraloría, la que por dictamen n° 44.747 de 2009 y N° 78.557 de 2013, señalando este último:”. .ese ente comunal plantea una interrogante acerca de si las liquidaciones de los profesores municipales se debe establecer remuneración denominada “bonificación proporcional mensual de la Ley N° 19.933” y otra distinta llamada “bonificación proporcional mensual de la ley N° 19.9410 . Sobre este punto, atendido los señalado en los párrafos anteriores, no cabe sino concluir que ellos resulta procedentes, dado que solo existe un beneficio remuneratorio así designado, que es aquel que actualmente se contiene en el artículo 63 de la Ley N° 19.017.” De lo cual se colige que los recursos aportados no se pagarán la designación de “bonificación proporcional mensual de la ley N° 19.933.” Criterio éste refrendado por el Ministerio de Educación a través de instrucciones dadas a los sostenedores.

DECIMO CUARTO: Que teniendo presente lo anterior y del examen de la prueba instrumental rendida por la demanda, tales como oficio Ministerio de Educación RD 07/1164 de fecha 2 de abril de 12018, sobre cálculo que ocupan

las Corporaciones para el pago de la bonificación proporcional Ley 19.410 y 19.933, con precisión si la determinación de los montos se hace por establecimiento educacional, por dotación docente comunal, con indicación de cada profesor, la forma en que los sostenedores municipales deben invertir dichos recursos y si existe diferencia entre colegios municipales y particulares subvencionados y el traspaso de fondos del Ministerio por Ley 19.410 y 19.933 a la Corporación de Quinchao; liquidaciones de remuneraciones de los docentes meses de abril 2012 a diciembre 2016; además el informe pericial de César Cárcamo el cual muestra se más informado y coherente con las materias, quien señala que los recursos recibidos conforme a la Ley 19.933 han sido incorporados a las remuneraciones de los profesionales docentes no en un ítem independiente, sino como subvención general, la cual ha sido íntegramente destinada al pago de los sueldos en relación a los aportes de la Ley 19.993, no obstante a que estos recursos estén efectivamente incorporados a en las correspondientes remuneraciones.

DECIMO QUINTO: Que, así las cosas, se concluye que la demandada, la Corporación Municipal dispuso debidamente de los recursos recibidos por las Leyes 19.410, por lo cual aquélla invirtió todos los fondos exclusivamente en el pago de remuneraciones docentes, sin desviarlos hacia otros gastos. Luego entonces, no se la puede obligar a pagar más allá de lo que recibió, quedando establecido que, de la manera señalada, el bono que reclaman los actores, esto es, el aumento de la bonificación proporcional no le corresponde a los profesores del sector municipal, sino solo a los del sector particular subvencionado. Por lo mismo, obligar a pagar a la Corporación de autos significaría hacer que pague con fondos para los cuales a ella no se le han asignado, lo que se sale de sus presupuestos. Y propiamente, lo que se demanda no emerge de acuerdos contractuales, sino de asignaciones que la ley establece y que ella misma, por

sobre el ente edilicio, ella precave y provee, obrando aquel ente más bien como intermediario.

DÉCIMO SEXTO: Que, el resto de la prueba rendida no altera o modifica los motivos señalados y sus conclusiones.

DECIMO SEPTIMO: Que, habiéndose dado lugar a la excepción de pago, resulta inoficioso pronunciarse sobre las otras, ni tampoco sobre la contestación en cuanto al fondo, sin perjuicio que lo resuelto sobre el pago implicaba aspectos de fondo, amén de evitarse incurrir en decisiones contradictorias eventualmente; y estimándose que acogido el pago en las condiciones y formas señaladas, cubre y pone a salvo a la demandada, bajo cualquier calidad, título o tiempo en que se presentaren los demandantes individualmente considerados.

Se dispone que por haber motivos plausibles para litigar no se condenará en costas a la vencida.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 41, 42, 420, 425 y siguientes, 446 y siguientes, 453, 454, 455, 456, 458, 459 y 510 del Código del Trabajo, y leyes 19.070, 19.410, 19.933 y demás mencionadas, resuelve:

I.- Que se rechaza la demanda interpuesta por Lucía Odette Alba Hernández, José Marcelo Araya Carrasco, Sergio Alberto Ojeda Bontes, Noelia del Carmen Paredes Cárdenas, María Eugenia Guajardo Tureuna, Víctor Manuel Pérez Frías, Cristian Alfredo Pérez Vivar, Marcela Carmen Campos Méndez, Carolina Olea Alarcón, René Eduardo Almonacid Serón, Manuel Aliro Cheuquepil Andrade, José Alfonso Álvarez Ruiz, Héctor Joel Ojeda Ruiz, Fabiola Oyarzún López, Diana Paillán Subiabre, Manuel Alberto Mansilla Mansilla, Martina Silva Hernández, Juan Álvarez Godoy, Marcela Barría Vargas, Luis Cárdenas Hernández, María Angélica Avendaño Bontes, Iván Sebastián Huaiquimilla Arriagada, Sandra Patricia Vera Álvarez, Marylyn Matas Ibarrola, Rita Ojeda Sotomayor, Vilma del Carmen Llauquén Llauquén, Sandra

Marisa Pichuncho Bontes, Violeta Isabel Mansilla Antimán, Flor Bernardita Santana Viva, Valeria Andrea Velásquez Ruiz, Fabián Ignacio Barrientos Sotomayor, Gisela del Carmen Cárdenas Cuitiño, Estefanía Gabriela del Carmen Labarca Gajardo, Claudio Rodrigo Mansilla Vivar, Juvenal Patricio Núñez Dimter, Manuel Leonardo Barrientos Barrientos, Carola Oyarzún Cárdenas, Carlos Hernán Contreras Alvarado, José Mauricio Calbuante Loncón, Víctor Hugo Alfonso Barría Álvarez, José Hugo Levill Levill, Walter Selín Pacheco Oliva, José Adrián Álvarez Álvarez, Martina Ignacia Silva Hernández, Alex Francisco Soto Vivar, Carlos Froilán Yáñez Delgado, Ramón Arturo Oyarzún González, Jaime Santiago Águila Cárdenas, Carmen Julia Vera Pérez, Verónica del Carmen Ulloa Oyarzún, Gisela Victoria Garcés Álvarez, David Antonio Lucero Ayala, Luis Heraldo Cárdenas Águila, Berardo Fabián Marchant Chequepil, Jessie Carolina Zurita Mansilla María Magdalena Reyes Aguilar, Luisa Palmenia Mansilla Mansilla, Pilar Antonieta Altamirano Ortega, Manuela Fabiola de Lourdes Álvarez Díaz, Judith del Carmen Santana Ruiz, Karina Ibarrolla Hernández, Felipe Caurapán González, Claudio Esteban González Ávila, Cecilia Andrea Chales Cárdenas, Luis Omar Almonacid Serón, Ramón Antonio Álvarez Ruiz, Nicolás Eduardo Rivas Aquevede, María Gladys Asencio Levicoy, Leonel Alberto cárdenas cuitiño, Ambrosio Olegario Hernández Almonacid, Nayadeth Alejandra Yáñez pastor, Johana de Lourdes Cartajena Marchant, Hilda de Lourdes Chamia Pérez, Manuel del Jesús Alarcón Torres, Ema Rosa Mansilla Mansilla, Silvia del Carmen Paredes Gallardo, Sandra Marisol Mayerovich Penoi, Claudio Esteban González Ávila, María Ángela barría Álvarez, Esteban Juan Efraín Gómez Vargas, María Haydée Asencio Levicoy, Sergio Alejandro Oyarzún Álvarez, Marcela Ingrid Contreras Panichine, Mabel del Transito Ruiz Huichaman, Patricia Estefania Gaona Candia, Astrid Torres Álvarez, Paula García navarro, Carmen Rosa Vivar Cuitiño, Johana de Lourdes Cartajena Marchant, Andrea Daniela Torrealba Garate, Samuel Alexis Pacheco

Esparza y Samuel Enrique Sánchez Sánchez en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR, representada legalmente por don WASHINGTON ULLOA VILLARROEL, en todas sus partes.

II. Que cada parte pagará sus costas.

Anótese, regístrese, notifíquese, hágase devolución de los documentos incorporados por las partes y archívense los antecedentes, en su oportunidad procesal.

Téngase por notificadas a las partes

RIT O-4-2017

RUC 17- 4-0051722-3

Proveyó don(a) HERNAN BENJAMIN MANCILLA VARGAS, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Achao.

En Achao a treinta de marzo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución precedente.